



Implicaciones de las Amenazas a la seguridad energética al departamento de Arauca por parte de los Grupos Armados ilegales que afectan la gobernabilidad

Mayor (EJC) Juan López

Artículo para optar al título profesional:

Magister en Seguridad y Defensa Nacionales

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia
2025

| DATOS GENERALES | |
|------------------------------|--|
| Nombre del estudiante | : Mayor (EJC) Juan López |
| Identificación | : 80853915 |
| Programa académico | : Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales |
| Tutor metodológico | : Henry Mauricio Acosta Guzmán |
| Tutor temático | : Henry Mauricio Acosta Guzmán |
| Fecha de entrega | : 26 Agosto 2025 |
| Extensión | : 11874 |

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

Implicaciones de las Amenazas a la seguridad energética al departamento de Arauca por parte de los Grupos Armados ilegales que afectan la gobernabilidad

Implications of Threats to energy security in the department of Arauca by illegal armed groups that affect governance

Juan López¹

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: Este artículo analiza las implicaciones de las amenazas a la seguridad energética en el departamento de Arauca por parte de grupos armados ilegales, y su impacto en la gobernabilidad. El objetivo general es examinar cómo la persistencia de actores armados afecta infraestructuras críticas, debilita la capacidad institucional y fragmenta la autoridad estatal. Se utilizó una metodología cualitativa basada en revisión sistemática de fuentes documentales entre 2015 y 2024, mediante codificación temática. Los hallazgos principales indican que el sabotaje a oleoductos, la extorsión a empresas y el control armado de corredores estratégicos profundizan la inseguridad estructural y generan desplazamiento forzado. Además, se evidenció la conexión entre violencia, fragilidad institucional e incremento de la impunidad en delitos contra la administración pública. Se concluye que la recuperación de la gobernabilidad en Arauca requiere una estrategia integral de presencia estatal sostenida, articulando seguridad, fortalecimiento institucional y desarrollo local para neutralizar la influencia armada ilegal.

Palabras clave:

Abstract:

Keywords: This article analyzes the implications of threats to energy security in the department of Arauca by illegal armed groups and their impact on governance. The general objective is to examine how the persistence of armed actors affects critical infrastructure, weakens institutional capacity, and fragments state authority. A qualitative methodology based on a

¹ Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Estudiante de la maestría de seguridad y defensa nacional, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. <https://orcid.org/0000-0003-2004-7466> - Contacto: landinezj@esdeg.edu.co.

systematic review of documentary sources between 2015 and 2024 was used through thematic coding. The main findings indicate that sabotage of oil pipelines, extortion of companies, and armed control of strategic corridors deepen structural insecurity and generate forced displacement. Furthermore, a connection was found between violence, institutional fragility, and the increase of impunity in crimes against public administration. It is concluded that the recovery of governance in Arauca requires an integral strategy of sustained state presence, articulating security, institutional strengthening, and local development to neutralize the influence of illegal armed groups.

Introducción

En los últimos años, el departamento de Arauca se ha convertido en un escenario paradigmático para comprender las tensiones entre seguridad energética, gobernabilidad territorial y presencia de actores armados ilegales en Colombia. Este territorio fronterizo, históricamente atravesado por dinámicas de exclusión estatal y conflictos sociales no resueltos, alberga infraestructuras críticas relacionadas con el transporte y explotación de hidrocarburos, como el oleoducto Caño Limón–Coveñas, que ha sido blanco recurrente de atentados. Según datos del Ministerio de Defensa (2023), entre 2010 y 2020 se registraron más de 300 ataques a esta infraestructura en Arauca, causando pérdidas económicas multimillonarias, afectaciones ambientales severas y un clima de inestabilidad persistente. La convergencia entre economías ilícitas, gobernanza criminal y ausencia sostenida del Estado ha generado un ecosistema de inseguridad estructural que compromete no solo el abastecimiento energético nacional, sino también la capacidad del Estado para ejercer soberanía efectiva sobre sus propios territorios.

La persistencia de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC en Arauca ha reconfigurado el control territorial, imponiendo esquemas de autoridad paralela y extorsión sobre el sector petrolero. Según Rivera (2023) revela que la región presenta una de las más altas tasas de interferencia armada en infraestructuras estratégicas del país, particularmente en ductos energéticos y plantas de bombeo. Esta situación no solo afecta la seguridad energética nacional dada la importancia del crudo de Arauca en la balanza exportadora, sino que debilita la gobernabilidad institucional al deslegitimar la autoridad del

Estado frente a comunidades que terminan subordinadas a lógicas armadas. Como resultado, se agravan los niveles de pobreza, se estanca el desarrollo regional y se profundiza la fragmentación estatal. El problema se localiza geográficamente en el corredor energético del nordeste del departamento de Arauca, especialmente en los municipios de Arauquita y Saravena, donde se ha documentado una correlación directa entre la presencia armada y la desestabilización de servicios públicos, inversión estatal y percepción de legitimidad institucional. En este contexto, la pregunta que orienta esta investigación es: **¿Cuáles han sido las implicaciones de la persistencia de las amenazas contra la seguridad energética en el Departamento de Arauca por parte de grupos armados ilegales que han causado un debilitamiento a la gobernabilidad?**

En efecto, el presente análisis es pertinente en la medida en que permite comprender cómo los conflictos no resueltos en territorios periféricos se traducen en vulnerabilidades críticas para la seguridad y defensa nacional. La afectación directa a infraestructuras energéticas como símbolo y herramienta del poder estatal revela la fragilidad de las políticas de control territorial y la necesidad de modelos de seguridad integrales que articulen lo militar, lo civil, lo social y lo ambiental. Analizar el caso de Arauca, desde una perspectiva estratégica y territorial, es esencial para formular políticas públicas que no repitan lógicas extractivistas descontextualizadas ni estrategias de militarización desconectadas del tejido social.

Metodología

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, con diseño documental y de revisión sistemática, orientado a la recolección y análisis de fuentes secundarias entre los años 2015 y 2024. Se emplea el modelo revisión documental para garantizar rigurosidad en la selección de estudios, priorizando publicaciones académicas indexadas, informes técnicos de organismos estatales y documentos de organizaciones sociales y multilaterales. La información se analiza mediante una codificación temática que articula categorías como: ecosistemas criminales, infraestructura crítica, seguridad energética, gobernabilidad territorial y soberanía. Se busca, así, identificar patrones, tensiones y vacíos en las políticas públicas de defensa frente a actores ilegales que operan en regiones estratégicas como Arauca.

La presente investigación se desarrolla a través de una revisión sistemática, con el objetivo de analizar las implicaciones de las amenazas a la seguridad energética en el departamento de Arauca por parte de los grupos armados ilegales y su impacto en la gobernabilidad. Para ello, se emplea un enfoque cualitativo basado en la recopilación, análisis e interpretación de fuentes secundarias, incluyendo artículos académicos, informes gubernamentales, documentos de organismos internacionales y literatura especializada en seguridad y defensa. La metodología sigue un proceso estructurado de búsqueda y selección de información en bases de datos reconocidas como Scopus, Web of Science, Google Scholar y Redalyc, aplicando criterios de inclusión como la pertinencia temática, el rigor académico y la actualidad de los documentos (publicaciones entre 2015 y 2024). Asimismo, se consideran informes de instituciones como el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, la Defensoría del Pueblo y organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz, que han

abordado el impacto del crimen organizado y el control de infraestructuras estratégicas en zonas de conflicto(Monje, 2011).

Aunado a lo anterior, el análisis de la información se realiza mediante una síntesis temática, organizando los hallazgos en categorías clave como: dinámicas de los ecosistemas criminales, presencia de actores armados en Arauca, impacto en la seguridad energética y efectos sobre la gobernabilidad. Para garantizar la fiabilidad de la revisión, se aplica el modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), permitiendo una selección rigurosa de estudios y la identificación de brechas en la literatura existente. A partir de esta sistematización, se busca comprender cómo la ausencia o debilidad del Estado en Arauca ha facilitado el control territorial por parte de grupos ilegales, generando afectaciones directas a la infraestructura energética y dificultando la consolidación de la gobernabilidad en la región(Vasilachis, 2006).

Amenazas a la Seguridad Energética en Arauca: Grupos Armados

Ilegales e Infraestructura Crítica

El departamento de Arauca representa una de las piezas clave en el entramado energético colombiano, no solo por su ubicación fronteriza estratégica con Venezuela, sino por su rol en la extracción y transporte de hidrocarburos, en especial a través del oleoducto Caño Limón–Coveñas. Esta infraestructura, junto con otras estaciones de bombeo y redes de distribución, constituye un nodo vital para el abastecimiento interno y las exportaciones de crudo. Sin embargo, la región ha sido históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que, aprovechando las debilidades institucionales y la geografía del

territorio, han convertido el control de estas infraestructuras en una herramienta de presión política, fuente de financiación ilícita y mecanismo de imposición territorial. La seguridad energética en Arauca no puede entenderse sin atender a estas dinámicas, que conjugan conflictividad armada, criminalidad organizada y omisión estatal.

En este contexto, se han configurado amenazas de carácter multifacético que comprometen la estabilidad del sistema energético nacional y profundizan las condiciones de vulnerabilidad en el territorio. El sabotaje sistemático a oleoductos, la extorsión a empresas del sector, el control armado de corredores logísticos y la imbricación con economías ilícitas como el narcotráfico o el contrabando de combustibles, evidencian la convergencia entre intereses criminales y estratégicos. Estas prácticas afectan no solo la infraestructura crítica, sino también el entorno social y ambiental, generando crisis recurrentes que trascienden el ámbito técnico y requieren respuestas integrales. Comprender las lógicas de estas amenazas implica analizar el valor geopolítico de Arauca, identificar los activos en riesgo y clasificar los tipos de amenazas desde un enfoque sistémico y territorial.

El valor estratégico de Arauca en la matriz energética nacional

El departamento de Arauca, ubicado en la frontera oriental de Colombia, constituye un eje estratégico en la arquitectura energética del país. Su relevancia no es reciente, sino que se consolidó desde los años ochenta con la puesta en funcionamiento del campo petrolero Caño Limón, uno de los yacimientos más importantes del territorio nacional. A partir de entonces, Arauca ha sido un punto de partida esencial para el transporte de crudo hacia el Caribe colombiano a través del oleoducto Caño Limón–Coveñas. Esta línea, de más de 770

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

kilómetros, no solo representa un activo de alto valor económico, sino también un símbolo de soberanía energética en un territorio históricamente marcado por el abandono estatal y la presencia de actores armados ilegales. Su operatividad es fundamental para garantizar el equilibrio de la balanza comercial del país y sostener la demanda interna de combustibles.

Más allá de su consolidada trayectoria en la producción de hidrocarburos, el departamento de Arauca presenta una oferta energética altamente diversificada, con un potencial significativo en fuentes renovables que aún se encuentran subexplotadas. En el componente solar, por ejemplo, el departamento evidencia una irradiación diaria promedio entre 5,00 y 5,47 kWh/m² en municipios clave como Arauca, Arauquita, Cravo Norte y Puerto Rondón, lo que lo posiciona como uno de los territorios con mayor capacidad para el desarrollo de parques solares a gran escala. Este dato cobra especial relevancia si se considera la tendencia nacional hacia una transición energética que reduzca la dependencia de fuentes fósiles y fortalezca la autonomía regional en términos energéticos. Desde la perspectiva de la seguridad nacional, esta abundancia solar representa una oportunidad para descentralizar la matriz energética, robustecer la resiliencia ante amenazas híbridas y fortalecer la sostenibilidad del abastecimiento en zonas fronterizas.

El análisis del recurso hídrico también revela un potencial considerable para la generación hidroeléctrica, especialmente en los municipios de Saravena y Cravo Norte, donde las características geomorfológicas y la presencia de afluentes permiten estimar capacidades de 208,37 MW y 149,61 MW respectivamente. Este tipo de datos no solo abre la puerta a proyectos energéticos alternativos, sino que plantea la necesidad de repensar la articulación entre territorio y seguridad energética desde una lógica integral. Una mayor

autonomía energética en estas zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado y con débil presencia estatal puede convertirse en una herramienta de estabilización territorial, siempre que los proyectos sean desarrollados con enfoque comunitario, gestión ambiental responsable y garantías de protección frente a intereses armados ilegales.

A pesar del potencial eólico identificado en diferentes alturas 10, 50 y 80 metros, la densidad energética en municipios como Arauca, Saravena y Fortul resulta limitada, no superando los 3,5 W/m, 17,5 W/m y 45,5 W/m respectivamente. Esto sugiere que, aunque la energía eólica no se perfila como la principal fuente en la región, podría jugar un rol complementario en una matriz energética diversificada, especialmente en zonas rurales dispersas que no están integradas plenamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Del mismo modo, el potencial de biomasa agrícola es impresionante, superando los 6.520 GW, aportados principalmente por el cultivo de plátano en el municipio de Tame. A esto se suma un estimado de 954,62 GW/años provenientes del sector pecuario, especialmente de la actividad bovina, ampliamente extendida a lo largo del departamento. Estos datos, aunque aún subutilizados, refuerzan la importancia de Arauca no solo como productor de crudo, sino como una plataforma potencial para la innovación energética en el oriente colombiano.

Sin embargo, el aprovechamiento real de estas capacidades dista considerablemente de su potencial. Según información oficial obtenida de ENELAR, del Sistema General de Regalías y de bases municipales, de los 116 proyectos energéticos identificados, 113 se enfocan exclusivamente en la ampliación y mantenimiento de redes eléctricas convencionales. Solo tres iniciativas equivalentes al 2,58% corresponden a proyectos de energía solar con instalación de paneles fotovoltaicos. No se registraron proyectos en curso

relacionados con energía eólica, hídrica o biomasa, lo que evidencia una orientación aún limitada hacia la transición energética en el departamento. Esta situación, desde la perspectiva de la seguridad y defensa, representa una vulnerabilidad estratégica, ya que perpetúa la dependencia de una infraestructura altamente centralizada y frágil ante ataques, mientras se desaprovechan oportunidades para construir resiliencia energética desde el territorio.

En la última década, el panorama ha comenzado a transformarse con el ingreso de proyectos de generación de energía alternativa. Uno de los hitos más importantes en este proceso fue el anuncio, en diciembre de 2021, de la inversión de 37,3 millones de dólares por parte de la empresa Klarzen Green Technology Inc. para la construcción de una planta solar en el campo petrolero de Caño Limón. Este proyecto, con más de 66.000 paneles instalados, tiene una capacidad proyectada de 40 megavatios y cubrirá hasta el 20 % del consumo energético del campo, además de evitar la emisión de más de 23.000 toneladas de CO₂ al año. La apuesta no solo responde a la necesidad de diversificación de la matriz energética, sino también a una visión estratégica que busca disminuir la dependencia de infraestructuras fácilmente vulnerables al sabotaje y fortalecer la resiliencia energética en una zona de alto riesgo.

De la misma manera, este tipo de iniciativas coloca a Arauca en el centro de una doble transición: por un lado, hacia un modelo más sostenible y tecnológicamente diversificado; por otro, hacia una estrategia de defensa más sofisticada, que reconozca que la seguridad energética no se limita al control militar del territorio, sino que implica garantizar el funcionamiento continuo, limpio y seguro de los sistemas de producción y distribución.

Desde la óptica de la defensa nacional, esto exige una mayor coordinación entre actores públicos, privados y comunitarios, así como el fortalecimiento de las capacidades del Estado en el monitoreo, protección y gobernanza de activos estratégicos(Ojeda, 2022). La infraestructura energética ya no es solo un objetivo económico: es un recurso crítico cuya integridad incide directamente en la estabilidad política y social de regiones fronterizas.

Infraestructuras críticas en riesgo: del oleoducto Caño Limón–Coveñas a las estaciones de bombeo

En contextos de violencia prolongada y disputas armadas por el control territorial, la infraestructura energética deja de ser un simple soporte técnico para convertirse en un blanco estratégico. Tal es el caso del oleoducto Caño Limón–Coveñas, cuya trayectoria atraviesa zonas de alta conflictividad, incluyendo el departamento de Arauca y, particularmente, la región del Catatumbo, donde convergen intereses armados ilegales, rentas ilícitas y vacíos históricos de institucionalidad(Peñaranda et al., 2022). Esta infraestructura crítica, operada por Ecopetrol y su filial Cenit, no solo garantiza el transporte de miles de barriles de petróleo hacia los centros de refinación y exportación del país, sino que representa uno de los activos más vulnerables frente a las dinámicas de sabotaje, extracción ilegal y violencia selectiva(Botero, 2024).

Durante 2024, se reportaron 45 ataques directos contra este oleoducto, generando interrupciones prolongadas en el bombeo, contaminación ambiental significativa, riesgo para las poblaciones cercanas y suspensión de actividades de mantenimiento por razones de seguridad (Cenit, 2025). Esta serie de atentados, ejecutados con artefactos explosivos

improvisados, ha afectado no solo el tramo Banadía-Ayacucho actualmente suspendido, sino también puntos estratégicos en zonas como Bochalema y La Selva, donde las condiciones de acceso y vigilancia son mínimas. En consecuencia, la infraestructura se ha convertido en un espacio de disputa no convencional, donde la seguridad física de los trabajadores, la continuidad operativa y la protección ambiental se ven severamente comprometidas.

Las estaciones de bombeo, subestaciones eléctricas y plantas de compresión en esta zona también han sido objeto de amenazas, extorsión, secuestros y acciones directas que buscan interrumpir el flujo de hidrocarburos o controlar sus operaciones. El secuestro de cuatro operarios de la empresa ISMOCOL, contratista de CENIT, ocurrido el 25 de octubre de 2024 en la vereda Carrizal, municipio de Convención, es apenas una de las múltiples expresiones del riesgo humano asociado a la gestión de estas infraestructuras(Cenit, 2024). Esta realidad ha llevado a la suspensión de labores técnicas esenciales como reparaciones mecánicas o liberación de esfuerzos geotécnicos debido a la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el personal operativo. Así, la amenaza trasciende lo material y adquiere un componente humano, pues se convierte en un factor de desprotección para trabajadores civiles insertos en escenarios de guerra irregular(Vera, 2021).

Figura 1. Infraestructura energética



Nota. Fuente: (R. Guerrero, 2021)

La magnitud de la afectación no se limita al petróleo. El sistema de gasoductos también enfrenta riesgos severos. La cuenca del Catatumbo registra una producción promedio de 2,59 millones de pies cúbicos diarios de gas, lo cual es clave para el abastecimiento regional (T. Guerrero, 2023). Si las amenazas persisten y se interrumpe la explotación continua, los yacimientos podrían perder presión, afectando irreversiblemente la gestión técnica de las reservas. A ello se suma la proliferación de válvulas ilícitas, que evidencian un desvío sistemático de hidrocarburos para alimentar economías ilegales. Según el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOESH) de la Policía Nacional, en 2024 se neutralizaron siete válvulas ilegales y se destruyeron más de 60 refinerías artesanales, tanques de almacenamiento y piscinas clandestinas. Estos datos ilustran la sofisticación de las redes criminales que, más allá del hurto, han establecido economías paralelas a costa de la infraestructura del Estado.

En términos doctrinales, lo que se vive en Catatumbo y Arauca se enmarca en un escenario de amenazas híbridas, donde actores no estatales emplean tácticas convencionales y no convencionales para debilitar al Estado mediante el sabotaje selectivo de activos estratégicos. La infraestructura energética deja de ser un medio para el desarrollo y se convierte en una herramienta de guerra. En este marco, el Decreto Legislativo 0132 de 2025, expedido bajo el Estado de Conmoción Interior, reconoce explícitamente la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para proteger la infraestructura energética, incluyendo la suspensión de distribución de combustibles en zonas críticas, como mecanismo de disuasión, contención y control operativo sobre insumos utilizados por grupos armados en la conducción de hostilidades.

En suma, la integridad del sistema energético en regiones como Arauca y el Catatumbo no puede ser garantizada únicamente mediante esquemas de vigilancia convencional. Se requiere una lectura estratégica que reconozca el papel dual de la infraestructura como fuente de vida y como objetivo militar, y que articule respuestas técnicas, políticas y de seguridad integral. Proteger el oleoducto Caño Limón–Coveñas y las estaciones asociadas no es solo preservar el flujo de petróleo: es defender el Estado mismo en territorios donde su presencia aún es disputada (Ramos & Orjuela, 2023).

[T4] Tipologías de amenazas: sabotaje, extorsión, control territorial y economías ilícitas

En el contexto del transporte de hidrocarburos en Colombia, particularmente a través del corredor estratégico Caño Limón–Coveñas, las amenazas que enfrenta esta infraestructura crítica son múltiples, interdependientes y evolucionan en función del entorno conflictivo y las dinámicas territoriales. Estas amenazas pueden clasificarse en cuatro tipologías principales: sabotaje, extorsión, control territorial y economías ilícitas. Cada una de ellas no solo representa un riesgo operativo para la infraestructura energética, sino que además revela los vínculos complejos entre el conflicto armado, la debilidad institucional y la configuración del poder en regiones periféricas.

El sabotaje a oleoductos como el Caño Limón–Coveñas ha sido históricamente una herramienta empleada por grupos armados ilegales como el ELN o disidencias de las FARC para generar presión política, demostrar capacidad militar o interrumpir el funcionamiento de una infraestructura estratégica del Estado. Entre 1986 y 2015, se registraron 3.567

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

acciones armadas contra infraestructura petrolera, y entre 2007 y 2023, los municipios por donde transita este oleoducto fueron blanco de 641 ataques mediante voladura, siendo los picos más altos en los años 2013 y 2018 (Ministerio de Defensa, 2023). Estas acciones generan derrames con graves impactos ambientales, como los más de 4 millones de barriles derramados entre 1980 y 2015 (DNP, 2016), pero también costos operacionales y de vigilancia para la empresa, y daños colaterales sobre la población civil. Esta forma de amenaza busca erosionar la presencia estatal y debilitar la economía legal, al tiempo que evidencia un control de facto sobre territorios con escasa capacidad institucional (Ramos & Orjuela, 2023).

La infraestructura energética no solo es atacada por su valor simbólico o estratégico, sino también como mecanismo para exigir rentas. Las empresas operadoras de oleoductos, como Ecopetrol y su filial Cenit, han sido objeto de múltiples esquemas de extorsión, tanto directos como indirectos. El secuestro de contratistas, como el ocurrido el 25 de octubre de 2024 en la vereda El Carrizal del municipio de Convención (Cenit, 2024), pone de manifiesto cómo la seguridad de los trabajadores se convierte en una moneda de negociación para presionar pagos o concesiones logísticas. Este tipo de amenaza no solo compromete el capital humano y las operaciones empresariales, sino que además profundiza la percepción de riesgo, inhibiendo la inversión privada y dificultando la sostenibilidad de los proyectos energéticos a largo plazo.

Los ataques a oleoductos y la extorsión no son eventos aislados; responden a una lógica más amplia de disputa territorial. Municipios como Tibú, Saravena o Arauquita han sido epicentro de confrontaciones armadas y de formas de gobernanza paralela ejercidas por

actores armados ilegales. El corredor Caño Limón–Coveñas atraviesa zonas donde el Estado ha sido sustituido, parcial o completamente, por organizaciones criminales que ejercen control sobre la movilidad, el acceso a servicios, la resolución de conflictos y la economía local. El sabotaje de la infraestructura es, en este sentido, una manifestación de un poder que se disputa desde lo material el control de recursos y corredores estratégicos, pero también desde lo simbólico, como lo demuestra la capacidad de restringir o permitir el funcionamiento de industrias clave como el petróleo o el gas (Rodríguez, 2021).

Finalmente, la relación entre el conflicto armado y la infraestructura energética se entrelaza con las economías ilícitas. El combustible, por ejemplo, ha sido desviado del circuito legal para ser utilizado tanto en la producción de cocaína como en actividades logísticas de grupos armados. De acuerdo con el Informe DH-MME (2024), se requieren entre 74 y 86 galones de gasolina para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína. La región del Catatumbo, una de las más afectadas por esta dinámica, presenta un consumo anual de combustibles superior a 14 mil millones de galones, lo que sugiere un uso significativo con fines ilegales. Este fenómeno genera una presión adicional sobre la infraestructura energética, ya que convierte a los poliductos y estaciones de servicio en objetivos de ataques o extracción ilegal, como lo evidencian las válvulas ilícitas y refinerías artesanales desmanteladas por la Policía Nacional (Semana, 2023).

Instituciones frágiles, desarrollo truncado y desconfianza social

El departamento de Arauca evidencia un círculo vicioso entre la debilidad institucional, el estancamiento del desarrollo socioeconómico y la erosión de la confianza social. Décadas de conflicto armado han fragmentado la capacidad del Estado local, produciendo instituciones

frágiles incapaces de proveer seguridad efectiva o bienes públicos de calidad. Las administraciones municipales y departamentales operan bajo amenazas constantes de grupos armados ilegales, lo que limita su presencia en el territorio y genera vacíos de poder.

Figura 2. *Complejo ferial obra inconclusa*



Nota. Fuente: Archivo Gobernación de Arauca

Por lo tanto, como muestra la figura esta situación institucional deficitaria no es solo un legado del pasado, sino un fenómeno persistente. Según un informe reciente de la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca, a enero de 2024 existían al menos 10 obras públicas inconclusas y 48 contratos sin liquidar, evidenciando graves fallas en la ejecución de proyectos esenciales para el desarrollo regional (Secretaría de Infraestructura de Arauca, 2024)(Arauca Stereo, 2024). La falta de terminación de obras no solo representa una ineficiencia administrativa, sino que profundiza la percepción de abandono estatal, al frustrar las expectativas de comunidades que ven postergadas soluciones en infraestructura vial, educativa o sanitaria. Este tipo de situaciones alimenta el ciclo de desconfianza social, debilita el control territorial legítimo y abre espacios para que actores armados ilegales ocupen las funciones de gobierno o provean soluciones alternativas muchas veces coercitivas a necesidades no satisfechas por el Estado.

En consecuencia, muchos planes de inversión y proyectos de infraestructura quedan inconclusos o nunca se inician, profundizando un desarrollo truncado a pesar de las importantes rentas petroleras de la región. Arauca es rico en recursos energéticos hogar de grandes yacimientos de petróleo, pero esa riqueza no se ha traducido en bienestar local; por el contrario, ha atraído actores violentos que disputan su control, saboteando las posibilidades de progreso (FIP, 2014). La economía petrolera, que podría ser motor de desarrollo, termina exacerbando la conflictividad y evidenciando las falencias institucionales para gestionar recursos de manera transparente y eficaz.

En este contexto, la desconfianza social se ha arraigado en la población. La ciudadanía percibe a menudo un Estado ausente o incapaz de proteger sus derechos y satisfacer sus necesidades básicas, lo cual mina la legitimidad de las autoridades gubernamentales. Comunidades enteras han visto cómo promesas de inversión social quedan incumplidas por culpa de la inseguridad o la corrupción, generando frustración y resentimiento (Ministerio de Minas y Energía, 2024).

Al mismo tiempo, el clima de violencia prolongada quiebra los lazos de confianza entre los habitantes: el temor a las infiltraciones de actores armados y a las retaliaciones reduce la participación comunitaria y debilita las redes de cooperación local. Por ejemplo, líderes sociales y comunitarios – cruciales para el tejido social – se han visto obligados a guardarse en silencio o desplazarse ante las amenazas, dejando a las comunidades sin referentes y profundizando la atomización social. Este déficit de confianza hacia las instituciones y entre vecinos alimenta a su vez la inestabilidad: una población que no confía en el Estado difícilmente colaborará con este, pudiendo incluso tolerar o apoyar

indirectamente la presencia de grupos ilegales si percibe algún beneficio o protección frente al abandono estatal (Serrano, 2024). En suma, la fragilidad institucional y el desarrollo fallido han socavado el contrato social en Arauca, abriendo espacio para que actores armados reemplacen ciertas funciones del Estado y perpetuando un ambiente de incertidumbre y desesperanza.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, estos fenómenos se retroalimentan involucrando dimensiones de seguridad, política, economía y tejido social. La falta de seguridad pública efectiva imposibilita el funcionamiento normal de la economía y los servicios (impactando el desarrollo); a su vez, el estancamiento socioeconómico y la pobreza crean caldo de cultivo para la ilegalidad y reducen la confianza en un sistema político que no ha logrado mejoras tangibles. Incluso el medio ambiente se ve afectado: los continuos atentados contra la infraestructura energética oleoductos, pozos han generado desastres ambientales locales, como derrames de crudo que contaminan ríos y suelos, afectando la salud y los medios de vida de las comunidades rurales.

Al mismo tiempo, estos impactos ambientales agravan el rezago agrario y alimentan la percepción de que ni el Estado ni las empresas protegen el territorio. Así, Arauca enfrenta un círculo de debilitamiento institucional y social, donde la inseguridad perpetúa la pobreza y la desconfianza, y viceversa. Superar este estancamiento requerirá reconstruir la presencia legítima del Estado y restaurar la confianza ciudadana mediante resultados concretos en seguridad y desarrollo humano.

La erosión de la autoridad estatal y la consolidación de poderes paralelos

La prolongada ausencia o debilidad del Estado en amplias zonas de Arauca ha derivado en una erosión de la autoridad estatal y el surgimiento de poderes paralelos ejercidos por los grupos armados ilegales. En muchas áreas rurales y fronterizas, la soberanía efectiva la detentan de facto guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o facciones disidentes de las FARC, que han ocupado el espacio dejado por unas instituciones estatales frágiles(Álvarez, 2018). Estos grupos imponen sus propias reglas y sistemas de control social, actuando como autoridades de facto ante la mirada impotente e incluso la connivencia ocasional – de funcionarios locales. Estudios sobre la región fronteriza colombo-venezolana señalan que en municipios de Arauca los grupos insurgentes “aplican su propia justicia”, resolviendo disputas y castigando infractores según sus normas, suplantando las funciones del Estado (Álvarez & Rodríguez, 2018).

Figura 3. *Acciones Violentas por regiones*

Acciones violentas por regiones

insightcrime.org

* Monitoreo hasta el 7 de marzo de 2022



Marzo 2022

Fuente: Observatorio Colombiano de Drogas, Misión de Observación Electoral, Indepaz

Nota Fuente: (Lizcano, 2022)

En el caso específico de Arauca, la presencia activa de grupos armados ilegales es un factor determinante en la consolidación de poderes paralelos que erosionan la autoridad estatal. De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Drogas y la organización *Insight Crime* (2022), los principales actores ilegales que operan en este departamento son las disidencias de las FARC, particularmente el Décimo Frente y el Frente 28, así como el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Estos grupos mantienen una disputa violenta por el control del territorio, recursos ilícitos y corredores estratégicos de movilidad entre Colombia y Venezuela. Su influencia se manifiesta no solo en acciones armadas contra la Fuerza Pública,

sino en la regulación coercitiva de la vida cotidiana, incluyendo la administración informal de justicia, la imposición de tributos extorsivos a empresas legales e ilegales, y la instrumentalización de la población civil como escudo social o fuente de inteligencia. Este control fáctico del territorio, en ausencia de una presencia estatal sólida, configura un orden paralelo armado que margina al Estado y socava su legitimidad(Lizcano, 2022).

En efecto, esa justicia paralela puede abarcar desde la resolución de conflictos comunitarios hasta la imposición de impuestos extorsivos a comerciantes y empresas, pasando por la regulación armada de actividades económicas (cultivos, contrabando, explotación petrolera). Tales dinámicas configuran un poder dual en el territorio: frente a un Estado oficialmente soberano, pero prácticamente ausente, surgen autoridades informales que llenan el vacío y disputan la lealtad de la población local(OCHA, 2022)l.

Un aspecto crítico es esta consolidación de poderes paralelos es la disputa por las rentas y economías ilícitas. Arauca, al ser zona petrolera y frontera internacional, es altamente estratégica para diversas economías ilegales: el tráfico de combustible y otros contrabandos con Venezuela, las extorsiones a contratistas del sector petrolero, el control de rutas para el narcotráfico y la minería ilegal en la región. Grupos como el ELN han logrado hegemonía territorial histórica en Arauca, en parte financiándose mediante el sabotaje y la extracción clandestina de petróleo (lo que genera ingresos por venta ilegal de crudo robado) y cobrando “vacunas” (extorsiones) a las empresas energéticas y sus contratistas. De hecho, oleoductos críticos como el Caño Limón-Coveñas han sido atacados regularmente, tanto para presionar al gobierno como para extraer petróleo de las tuberías perforadas. Esta realidad

evidencia la incapacidad del Estado para proteger eficientemente incluso activos estratégicos de la nación; cada atentado contra el oleoducto no solo produce pérdidas económicas y daños ambientales, sino que además simboliza la vulnerabilidad de la autoridad estatal frente al reto insurgente. El control de estas rentas ilícitas y el monopolio de la fuerza en ciertas zonas permite a los grupos ilegales consolidar un orden paralelo: armados con recursos financieros y poder coercitivo, reemplazan funciones de gobierno (seguridad, justicia, recaudo) y fijan las reglas del juego locales (Rodríguez, 2021).

Por consiguiente, la erosión de la autoridad estatal en Arauca se ha exacerbado en años recientes tras la desmovilización de las FARC en 2016. Si bien el Acuerdo de Paz redujo la confrontación con ese grupo, no vino acompañado de una presencia estatal suficiente en los antiguos bastiones guerrilleros. Como resultado, nuevos actores llenaron el vacío: el ELN expandió su influencia y facciones disidentes de las FARC surgieron para disputar territorios y economías. Hacia 2021–2022, la pugna entre el ELN y las disidencias por el control de Arauca intensificó la violencia, evidenciando que el Estado seguía sin controlar plenamente la zona (Trejos et al., 2024). Enfrentamientos armados entre estas guerrillas rivales causaron masacres y múltiples desplazamientos, mientras la Fuerza Pública se mostraba insuficiente para evitar la guerra local.

Por ejemplo, en enero de 2022 estallaron cruentos choques entre el ELN y el Frente 10 de las disidencias, dejando al menos 23 muertos en pocos días y cerca *de* 1.500 personas desplazadas de sus hogares (Defensoría del Pueblo, 2022). Estos hechos dejaron al descubierto hasta qué punto la autoridad del Estado se había diluido, al punto que dos grupos

ilegales libraron combates abiertos por el dominio territorial, actuando cada uno como poder establecido en diferentes enclaves (Unidad para las Víctimas, 2022). La respuesta gubernamental envió de tropas adicionales, consejos de seguridad – evidenció una reacción tardía para intentar recomponer la presencia estatal en un territorio ya copado por la autoridad paralela de facto de los grupos armados. En suma, la erosión de la autoridad estatal en Arauca ha permitido que los grupos ilegales se enquisten como poderes paralelos, regulando la vida cotidiana, explotando la economía local y desafiando abiertamente la soberanía del Estado colombiano.

Consecuencias sobre la capacidad institucional: cooptación, corrupción y vacíos normativos

La penetración de los grupos armados en Arauca no solo se manifiesta en el control territorial, sino también en la distorsión de las instituciones oficiales. Una de las consecuencias más graves es la cooptación de organismos públicos por parte de redes ilegales, lo que a su vez alimenta la corrupción sistémica y genera vacíos normativos en la región. Mediante la intimidación, la infiltración y la complicidad, las guerrillas y otros actores criminales han logrado en ciertos casos subordinar a autoridades locales a sus intereses (Hung Hui, 2008).

De la misma manera, se evidencia en episodios como la captura en 2021 del entonces gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, acusado por la Fiscalía de tener nexos con el ELN y de desviar recursos públicos en favor de este grupo armado. El caso de Castillo imputado por delitos de concierto para delinquir y financiación del terrorismo reveló cómo

las más altas instancias del gobierno departamental podían haber sido cooptadas por la insurgencia, facilitando contratos y permitiendo economías ilícitas a cambio de apoyo o prebendas(Transparencia por Colombia, 2025).

Del mismo modo, este no es un hecho aislado: en contextos de alta presión armada, funcionarios locales, policías, jueces e incluso candidatos electorales enfrentan amenazas que los llevan a colaborar con los grupos ilegales, o sufren la infiltración directa de personas al servicio de dichos grupos en sus nóminas. Tales dinámicas degradan la capacidad institucional de gobernar con autonomía y probidad, traduciéndose en corrupción administrativa (desvío de fondos, sobornos, clientelismo armado) y en la pérdida de eficacia de las entidades estatales para cumplir su misión.

Por lo tanto, la corrupción fomentada por la connivencia con actores armados tiene efectos devastadores en la gobernabilidad. Recursos que deberían destinarse a salud, educación o infraestructura terminan engrosando economías ilícitas o fortunas personales, perpetuando la precariedad de los servicios públicos. Por ejemplo, inversiones para mejorar vías de acceso o escuelas pueden ser saboteadas o redirigidas fraudulentamente en beneficio de contratistas asociados a los grupos armados, lo que deja obras inconclusas o de mala calidad que no resuelven las necesidades de la población.

Tabla 1. *Indicadores de impunidad por departamento en Colombia (casos de corrupción en la administración pública)*

| Departamento | Nº de denuncias | % Sin condena | Nº Sin condena |
|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| San Andrés | 228 | 99,1 % | 226 |

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

| | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| Guaviare | 300 | 99,0 % | 297 |
| Vaupés | 2.740 | 98,5 % | 2.699 |
| Arauca | 831 | 97,6 % | 811 |
| Casanare | 922 | 97,5 % | 899 |
| Putumayo | 759 | 97,5 % | 740 |
| La Guajira | 1.442 | 97,2 % | 1.402 |
| Córdoba | 214 | 97,2 % | 208 |
| Bolívar | 641 | 97,2 % | 623 |
| Sucre | 1.862 | 97,0 % | 1.806 |

Fuente: Secretaría de Transparencia, enero 2024. Datos presentados por el secretario Andrés Idárraga (Secretaría de Transparencia, 2023).

En el contexto del debilitamiento institucional en Arauca, uno de los indicadores más alarmantes es la tasa de impunidad judicial en los delitos contra la administración pública. Según datos recientes divulgados por la Secretaría de Transparencia, el 97,6 % de las denuncias registradas en Arauca por hechos de corrupción no han culminado en condena judicial, lo cual representa una de las cifras más críticas a nivel nacional. De un total de 831 denuncias, 811 no han resultado en sentencia condenatoria, lo que evidencia una justicia inoperante frente a los delitos que socavan la confianza ciudadana y el funcionamiento del aparato estatal. Este patrón se repite en al menos 20 departamentos del país, donde la impunidad supera el 95 %, configurando un panorama de fragilidad estructural del sistema judicial que compromete seriamente la gobernabilidad y la eficacia del control público (Secretaría de Transparencia, 2023).

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, sintetizó este fenómeno con contundencia al afirmar que Colombia agoniza en un mar de impunidad, refiriéndose a una

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

justicia que apenas logra responder a un tímido 6 % de los casos de corrupción. Este diagnóstico no solo tiene implicaciones morales o éticas, sino consecuencias operativas en territorios como Arauca, donde la falta de castigo a funcionarios corruptos, contratistas irregulares o redes de clientelismo alimenta un sistema de incentivos perversos que favorece la infiltración armada y la perpetuación del subdesarrollo (Secretaría de Transparencia, 2023). Cuando los ciudadanos perciben que los delitos de cuello blanco no tienen consecuencias, se rompe el vínculo entre legalidad y justicia, y se refuerza la percepción de que las instituciones están capturadas o son ineficaces.

En este sentido, la impunidad no solo es un síntoma del deterioro institucional: es también un factor de legitimación indirecta del poder paralelo ejercido por los grupos armados, que se presentan como más eficaces o justos, aunque lo hagan por vías coercitivas. Combatir esta impunidad sistémica es, por tanto, un prerrequisito para la reconstrucción del Estado de derecho en Arauca. Por un lado, existe la normativa oficial colombiana, prácticamente inaplicable en terreno por falta de capacidad o presencia; por otro, la normativa informal impuesta por los grupos armados, que puede ser sumaria y autoritaria, pero que suele tener mayor cumplimiento real en esas comunidades por el temor que inspira. Tal situación socava la institucionalidad democrática a nivel local, porque la población no internaliza la legitimidad de las leyes oficiales, sino que actúa según la coerción paralela. Adicionalmente, la cooptación y corrupción minan la capacidad institucional en un sentido administrativo: funcionarios honestos se ven aislados o deben exiliarse de la región, mientras que puestos clave pueden quedar vacantes por falta de personas dispuestas a ejercer cargos públicos bajo riesgo (Botero, 2024).

Esto agrava el déficit de gestión pública: si no hay suficientes jueces, alcaldes operando plenamente o si estos actúan bajo instrucciones extraoficiales, las políticas públicas no se implementan, las brechas sociales se ensanchan y la legalidad se vuelve la gran ausente. En síntesis, la infiltración armada produce un coctel corrosivo de cooptación institucional, corrupción endémica y vacíos normativos que desarticulan el Estado de derecho en Arauca, con consecuencias negativas para la gobernabilidad y el desarrollo regional.

Efectos sociales: desplazamiento forzado, fragmentación comunitaria y pérdida de legitimidad

Las amenazas a la seguridad en Arauca trascienden el ámbito institucional y económico, impactando profundamente el tejido social y la vida de las comunidades. Uno de los efectos más visibles y dramáticos es el desplazamiento forzado de poblaciones. La violencia recurrente –asesinatos selectivos, enfrentamientos entre grupos armados, amenazas directas a líderes o pobladores obliga a miles de familias araucanas a huir de sus tierras y hogares para salvaguardar sus vidas. En los últimos años se han registrado oleadas de desplazamientos masivos en el departamento. Por ejemplo, durante la escalada de confrontaciones entre el ELN y disidencias de las FARC a inicios de 2022, más de *1.500 personas tuvieron que huir* de varios municipios (como Tame, Fortul y Arauquita) para refugiarse en zonas más seguras(OCHA, 2022).

Tabla 2. *Impacto del Desplazamiento Forzado en Arauca (2021)*

| Indicador | Descripción | Fuente |
|---|--|--|
| Hecho victimizante más frecuente | Desplazamiento forzado | Unidad para las Víctimas |
| Nuevas víctimas registradas (2021) | 2.536 personas en Arauca | Unidad para las Víctimas (2021) |
| Consecuencias directas | Pérdida de vivienda, tierras, negocios; vaciamiento de escuelas; migración interna | Análisis territorial de desplazamiento |
| Impacto adicional | Desarraigo, trauma psicosocial, ruptura del tejido social | unidadvictimas.gov.co |

Nota. Fuente: (Unidad para las Víctimas, 2022)

La Unidad para las Víctimas ha indicado que el desplazamiento forzado es el hecho victimizante más frecuente en Arauca en tiempos recientes, con 2.536 personas nuevas registradas oficialmente como víctimas de desplazamiento solo en un periodo anual reciente (cifras de 2021). Estas cifras reflejan una crisis humanitaria persistente: comunidades enteras abandonan sus proyectos de vida, sus fincas o negocios, escuelas se ven vacías y la población rural se concentra cada vez más en cascos urbanos o migra fuera de la región. El desplazamiento conlleva, además, pérdida de medios de subsistencia (tierras, ganado, empleo) y trauma psicosocial, dificultando la reconstrucción del tejido social incluso después de cesar la violencia (Unidad para las Víctimas, 2022).

A la par con el desplazamiento, ocurre una fragmentación comunitaria paulatina. La constante intimidación y la infiltración armada han sembrado la desconfianza entre vecinos y debilitado los lazos asociativos tradicionales. En un ambiente donde cualquiera puede ser informante de algún grupo o verse obligado a tomar partido, las divisiones internas en las comunidades se exageran. Muchas juntas de acción comunal o asociaciones campesinas han

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

dejado de funcionar adecuadamente por miedo a reunirse o por estar cooptadas por grupos armados. Esta ruptura de las redes organizativas impide la acción colectiva para reivindicar derechos o emprender proyectos comunales, dejando a la sociedad civil dispersa y vulnerable.

Adicionalmente, el tejido social se fragmenta generacionalmente: mientras líderes veteranos han sido asesinados o amenazados, muchos jóvenes han sido reclutados por las guerrillas o han migrado en busca de seguridad, quebrando la transmisión intergeneracional de conocimientos comunitarios y liderazgos locales. La convivencia cotidiana se resiente cuando los espacios públicos se vacían por temor (pocas actividades culturales, deportivas o encuentros comunitarios) y cuando el control social armado impone *normas del miedo* – toques de queda informales, restricciones a la movilidad o a ciertas expresiones culturales – que erosionan la vida comunitaria. En síntesis, la violencia prolongada rompe el entramado social, dividiendo comunidades tanto espacialmente (por desplazamientos y migraciones) como psicológicamente (por la desconfianza y el miedo).

Otro efecto social de largo plazo es la pérdida de legitimidad de las instituciones y, en general, de la idea de un orden social justo. La población de Arauca, sometida a esta situación, percibe que ni el Estado ni, en ocasiones, los mismos líderes tradicionales de la comunidad han podido protegerlos o representarlos eficazmente. Cada promesa estatal incumplida, cada acto de corrupción impune o cada violación de derechos no reparada merma la confianza pública en la institucionalidad. Así, amplios segmentos de la ciudadanía no se sienten representados por sus autoridades y dudan de la utilidad de los canales legales para resolver sus problemas. Esto tiene implicaciones serias en términos de gobernabilidad

democrática: bajos niveles de participación en procesos electorales o en espacios de planeación local, apatía política y un vacío de legitimidad que puede ser llenado por narrativas antisistema.

De hecho, los grupos armados explotan este desencanto presentándose a sí mismos como alternativas de orden o como defensores del “pueblo” frente a un Estado pintado como opresor o indiferente. Si bien esas reivindicaciones insurgentes esconden sus propias agendas e imposiciones, logran calar en algunas comunidades marginadas donde la única cara del Estado conocida ha sido la militarización o el abandono. El resultado es que el contrato social se resquebraja: los ciudadanos no ven garante de sus derechos ni al Estado ni, muchas veces, a las organizaciones sociales tradicionales, generando un sentimiento generalizado de indefensión y distancia frente a cualquier forma de autoridad legítima.

Los impactos psicológicos y culturales de esta pérdida de legitimidad también son relevantes, la normalización de la violencia y la corrupción puede llevar a una desensibilización de la sociedad local, en la que las nuevas generaciones crecen con escasa fe en la educación o el trabajo legal como vías de progreso, percibiendo en cambio el poder de facto de las armas o la ilegalidad como parte del paisaje cotidiano. Esta erosión de valores de legalidad y convivencia pacífica dificulta aún más cualquier iniciativa de paz y reconciliación, pues la gente tiende a desconfiar de los discursos oficiales y de la posibilidad de un cambio real. En definitiva, las amenazas a la seguridad energética y la presencia de grupos armados en Arauca han tenido consecuencias sociales devastadoras: han expulsado a poblaciones enteras, quebrantado la cohesión comunitaria y minado la legitimidad del Estado y el tejido de confianza sobre el cual se construye la gobernabilidad desde la base social.

Propuestas Estratégicas para la Seguridad Energética y la Gobernabilidad Territorial en Arauca

Frente a este complejo escenario, resulta imperativo articular propuestas estratégicas integrales que aborden simultáneamente los desafíos de seguridad energética y de gobernabilidad territorial en Arauca. Dada la naturaleza multidimensional del problema – que engloba dimensiones de seguridad, política, desarrollo socioeconómico, medio ambiente y tejido social – las soluciones no pueden limitarse a la respuesta militar o a intervenciones aisladas. A continuación, se plantean lineamientos estratégicos orientados a restablecer el control estatal legítimo, proteger la infraestructura energética y promover un desarrollo regional sostenible que debilite las bases del conflicto:

Enfoque integral: seguridad, desarrollo y participación

La primera propuesta es adoptar un enfoque integral que combine acciones de seguridad, impulso al desarrollo y promoción de la participación ciudadana. Esto implica diseñar intervenciones coordinadas donde la presencia y acción de la Fuerza Pública vayan de la mano con inversiones sociales y con espacios de diálogo con la comunidad. Experiencias internacionales y nacionales sugieren que la seguridad duradera solo es posible si se atienden también las causas subyacentes del conflicto, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades (DNP, 2019). En el caso de Arauca, un enfoque integral supondría, por un lado, asegurar la infraestructura energética crítica – reforzando la vigilancia de oleoductos,

torres eléctricas y campos petroleros y, por otro, invertir en el bienestar de las comunidades aledañas a esa infraestructura para generar un entorno de cooperación y beneficio mutuo(T. Guerrero, 2023).

Del mismo modo, cuando las poblaciones locales perciben que la explotación de los recursos energéticos les aporta mejoras tangibles (empleo, regalías bien invertidas, proyectos productivos), están más dispuestas a colaborar con su protección y menos propensas a tolerar a los saboteadores(P. J. Ramírez, 2011). Por ello, se debe establecer un vínculo directo entre seguridad energética y desarrollo local: por ejemplo, canalizar parte de las regalías petroleras a programas de desarrollo rural, vías terciarias, electrificación rural y servicios básicos en las veredas afectadas por la violencia.

Asimismo, este enfoque integral requiere activar la participación ciudadana en la construcción de soluciones. La población araucana debe ser vista no solo como beneficiaria, sino como actor clave para la consolidación de la paz y la gobernabilidad. En la práctica, esto se traduce en fortalecer los espacios de diálogo y concertación locales como los consejos de desarrollo rural, las mesas de víctimas, los comités de hidrocarburos asegurando que las comunidades tengan voz en la definición de prioridades de inversión y en las estrategias de seguridad. Su conocimiento del territorio y de las dinámicas locales es invaluable para diseñar políticas contextualizadas y legítimas.

Por ejemplo, iniciativas de vigilancia comunitaria cooperativa, donde habitantes organizados informan a las autoridades sobre actividades sospechosas a cambio de garantías de seguridad y beneficios para la comunidad, pueden complementar la acción oficial en áreas de difícil acceso. Este tipo de participación, sin embargo, solo es viable si existe confianza:

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

por eso, el Estado debe brindar protección real a líderes comunitarios y cumplir los compromisos que asuma en estas mesas de concertación, de modo que la comunidad vea resultados y refuerce su confianza en la vía institucional. En resumen, una estrategia integral conjuga fuerza y presencia del Estado para brindar seguridad, políticas socioeconómicas para el desarrollo inclusivo, y mecanismos de participación que involucren a la ciudadanía en la construcción de la paz territorial.

[T3] Fortalecimiento de la presencia estatal y recuperación del control territorial

Es fundamental fortalecer la presencia estatal en Arauca en todas sus expresiones institucional, militar, judicial para recuperar el control territorial y restablecer el Estado de derecho. La presencia estatal no debe entenderse únicamente como un mayor número de tropas, sino como una presencia multidimensional y sostenida de entidades civiles y fuerza pública que permita al Estado ejercer autoridad legítima en cada rincón del departamento(Blackwell, 2021). En materia de seguridad, se propone replantear el despliegue militar y policial con criterios de eficacia y respeto a los derechos humanos: establecer bases o destacamentos permanentes en zonas estratégicas hoy desprotegidas (por ejemplo, corredores del oleoducto y áreas rurales apartadas), mejorar las capacidades de inteligencia para anticipar ataques a infraestructura energética, y coordinar operaciones con las autoridades venezolanas cuando sea posible, dado el carácter binacional del problema(Álvarez, 2018).

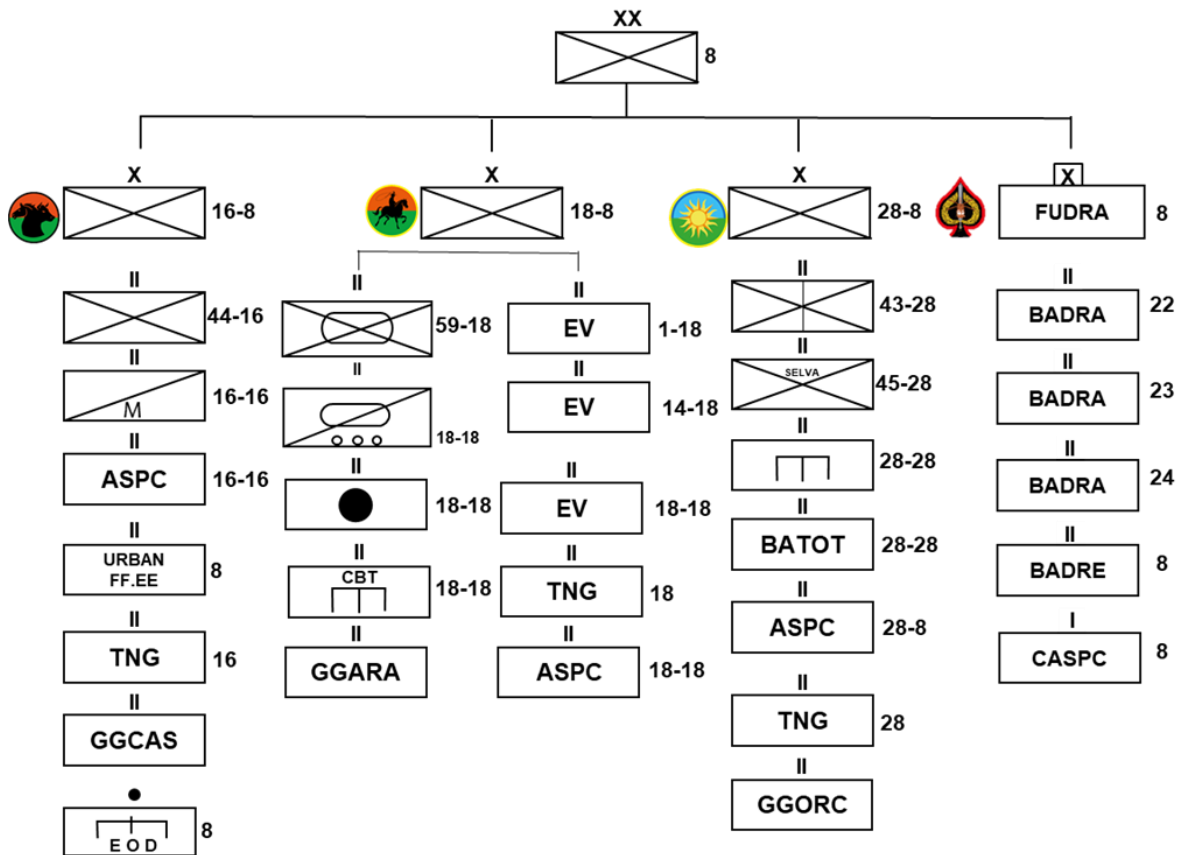
El fortalecimiento de la presencia estatal en Arauca desde la doctrina de la Seguridad y Defensa Nacional debe concebirse como una estrategia de estabilización multidimensional, cuyo eje articulador es el control territorial sostenido, la protección de la población y el aseguramiento de infraestructuras críticas, como el oleoducto Caño Limón–Coveñas(Acevedo et al., 2022). Este proceso debe estar anclado en operaciones conjuntas, coordinadas y persistentes, dirigidas no solo a neutralizar amenazas armadas, sino a facilitar el despliegue institucional del Estado y el restablecimiento del orden constitucional.

Desde el plano operacional, se requiere una conducción ofensiva del territorio, que trascienda el despliegue de tropas para constituirse en una maniobra integral: posicionamiento de bases militares permanentes, creación de corredores seguros, y capacidades de inteligencia y movilidad que permitan anticiparse a las amenazas híbridas. El Ejército debe garantizar presencia efectiva en las zonas rurales más vulnerables, incluyendo la frontera binacional, donde las disidencias de las FARC y el ELN ejercen control de facto. En este contexto, la presencia militar debe construirse bajo el concepto de centros de estabilización y control territorial, apoyados por elementos de acción integral, comunicación estratégica y acercamiento comunitario, según el modelo de las Fuerzas de Tarea Multimisión (FUTAM)(Fadul, 2022).

A su vez, esta estrategia debe articularse con los Centros de Gravedad definidos doctrinalmente: en lo propio, la población y el ser militar integral; en lo enemigo, las redes criminales transnacionales y las economías ilícitas. La misión, entonces, no se reduce a una confrontación armada, sino a una batalla por la legitimidad, en la que el Ejército Nacional debe posicionarse como protector, garante de derechos y facilitador del desarrollo humano y

económico. Esto exige entrenamiento en derechos humanos, una ética operativa robusta y disciplina institucional que refuerce la confianza ciudadana.

Figura 4. Estructura orgánica de la Octava división



Nota. Fuente: (Ejército Nacional de Colombia, 2022)

La Octava División del Ejército Nacional es la unidad operativa mayor encargada del control territorial en la región nororiental de Colombia. Creada en 2009 y con sede en Yopal (Casanare), esta División tiene jurisdicción sobre los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, y algunos sectores estratégicos en Boyacá, Meta y Norte de Santander, abarcando una extensión superior al 22 % del territorio nacional. Esta magnitud territorial, sumada a su carácter fronterizo y a la presencia de economías ilegales, hace de la DIV08 un

actor central en la lucha contra grupos armados ilegales(Ejército Nacional de Colombia, 2022).

La Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, con jurisdicción directa sobre el departamento de Arauca, constituye el componente militar de mayor presencia territorial y operativa en esta región estratégica de la frontera oriental. Su despliegue responde a la complejidad del entorno operacional, caracterizado por la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas, amenazas a infraestructuras críticas y una frontera porosa con Venezuela(Rivera, 2023). La Brigada 18 articula diversas capacidades tácticas y técnicas diseñadas para ejercer control territorial sostenido, disuadir al enemigo y proteger a la población civil, mediante un despliegue integrado y persistente en zonas rurales, urbanas y de alta sensibilidad energética(Trujillo et al., 2022).

Entre sus principales unidades se destaca el Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 “General Gabriel Reveiz Pizarro”, con sede en Saravena y Cubará, que aporta movilidad blindada, vigilancia fronteriza y patrullaje ofensivo en corredores de infiltración ilegal. Esta unidad mecanizada ha sido clave en la contención de actores armados que operan a ambos lados de la frontera y en la custodia de ejes viales estratégicos. A su vez, los batallones de artillería e ingenieros militares amplían la capacidad de fuego indirecto y de movilidad táctica, facilitando la instalación de bases, la recuperación de terreno y la intervención rápida ante ataques a infraestructura energética o vías de comunicación(Ejército Nacional de Colombia, 2022).

Una de las fortalezas distintivas de esta brigada es la presencia de Batallones Especiales Energéticos y Viales (BEEV), diseñados para la protección directa de activos

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

estratégicos como el oleoducto Caño Limón–Coveñas, estaciones de bombeo, torres eléctricas, subestaciones y obras viales. Estos batallones están desplegados en puntos críticos como Arauquita, Tame, Fortul y Cravo Norte, constituyéndose en una fuerza táctica especializada para responder a atentados, reparar daños estructurales y prevenir acciones de sabotaje por parte de grupos armados ilegales. Asimismo, la Brigada 18 cuenta con el GAULA Arauca, encargado de las operaciones de inteligencia antiextorsión y secuestro, y con el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 8, entrenado para combate en entornos urbanos, hostigamientos dirigidos y neutralización de objetivos de alto valor.

En línea con los procesos de modernización doctrinal del Ejército Nacional, la Brigada 18 se encuentra en una fase de reconfiguración táctica orientada a adoptar el modelo FUTAM2 (Fuerza de Tarea Multimisión Tipo 2). Esta transformación estructural implica la integración del Batallón Mecanizado No. 59 y la adopción de un modelo de comando más ágil, interoperable y adaptable al entorno cambiante de amenazas híbridas. Bajo este nuevo enfoque, la brigada fortalecerá su capacidad de reacción rápida, movilidad terrestre, inteligencia táctica y coordinación interinstitucional, permitiéndole ejecutar operaciones combinadas que integren seguridad ofensiva, protección de infraestructura crítica, y acompañamiento a entidades del Estado en procesos de estabilización territorial.

Una estrategia específica para Arauca podría ser la implementación decidida de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de las llamadas Zonas Futuro u otras iniciativas de estabilización que el gobierno nacional ha delineado para regiones conflictivas (Naranjo & Machuca, 2019). Estos programas, surgidos del Acuerdo de Paz de 2016, buscan precisamente integrar seguridad y desarrollo mediante una presencia robusta

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

del Estado. Es imprescindible acelerar la ejecución de los planes de acción para la transformación regional ya pactados con las comunidades de Arauca en el marco del PDET, priorizando aquellas obras y programas que afiancen la conectividad y la economía local (vías, distritos de riego, colegios, centros comunales)(S. D. M. Ramírez, 2021).

Igualmente, el gobierno central debe acompañar técnica y financieramente a la administración departamental y a los municipios para la ejecución eficaz de estos planes, asegurando que no sean dilatados por la inseguridad. A la par, la estrategia de Zonas Futuro –que contempla intervenciones integrales en territorios específicos con presencia coordinada de Estado, sector privado y cooperación internacional debería reforzarse en Arauca, dando un mensaje claro de compromiso sostenido: no se trata de operativos esporádicos, sino de una transformación permanente donde el Estado se queda. Solo así se logrará dismantelar los santuarios que hoy sirven a los grupos armados y restablecer la soberanía estatal en todo el territorio araucano.

[T4] Desarrollo regional sostenible: inversión social, empleo legal y reconciliación territorial

Para neutralizar las raíces económicas y sociales del conflicto en Arauca, la estrategia debe promover un desarrollo regional sostenible que ofrezca alternativas reales a las economías ilegales y reconstruya el tejido social. Un pilar central de esta propuesta es incrementar la inversión social del Estado y del sector privado en el departamento. Las comunidades necesitan ver mejoras concretas en su calidad de vida: acceso a agua potable, centros de salud

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

bien dotados, escuelas con infraestructura digna y pertinencia cultural, programas de vivienda, entre otros. Priorizar la inversión social envía el mensaje de que la vida y el bienestar de las personas son tan importantes como la seguridad energética. En el caso de Arauca, esto cobra especial relevancia en zonas rurales productoras de petróleo que históricamente han recibido menos de lo que aportan. Mecanismos como las Obras por Impuestos donde las empresas petroleras pueden ejecutar directamente proyectos de desarrollo en las comunidades a cambio de deducciones tributarias – deben orientarse a este departamento para acelerar obras de impacto. Igualmente, es crucial fortalecer la presencia de programas sociales del gobierno nacional (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, etc.) y de la cooperación internacional humanitaria, de modo que la población vulnerable reciba acompañamiento y oportunidades en el corto plazo (Robles & Urrutia, 2018).

Junto a la inversión social, se debe fomentar decididamente el empleo legal y las economías lícitas. Muchos jóvenes y campesinos en Arauca han terminado vinculados a economías ilegales (como el contrabando de gasolina, el cultivo de coca en zonas vecinas, o el mismo enrolamiento en la nómina guerrillera) por falta de opciones laborales dignas. Por ello, un plan de desarrollo sostenible debe identificar y potenciar sectores productivos legales con potencial en la región (Hernandez et al., 2023). La ganadería y la agricultura, tradicionales en Arauca, requieren apoyo técnico y comercial para mejorar su productividad y conectar con mercados, superando las trabas impuestas por el conflicto (como la dificultad para sacar productos por vía terrestre). Podría impulsarse, por ejemplo, un programa de agroindustrias locales que transformen productos agrícolas de Arauca (cacao, plátano, lácteos) generando valor agregado y empleos locales, con el apoyo de entidades como el SENA en capacitación.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

Asimismo, explorar el ecoturismo y turismo cultural en áreas seguras del departamento – resaltando la riqueza llanera y reservas naturales podría diversificar la economía más allá del petróleo (Romero & Pérez, 2019). Toda iniciativa económica debe venir acompañada de créditos blandos, mejora en infraestructura de transporte y energía eléctrica confiable para pequeñas industrias, creando un ecosistema propicio para el emprendimiento legal. Al ofrecer empleos e ingresos legales, se debilita el reclutamiento por parte de grupos armados y se resta base social a las economías ilícitas.

Por último, pero no menos importante, el desarrollo sostenible en Arauca exige procesos de reconciliación territorial y reconstrucción del tejido humano. La intervención estatal no puede limitarse a lo material; debe abordar las heridas sociales que ha dejado el conflicto. En este sentido, se propone impulsar espacios de diálogo social y reconciliación en las comunidades, donde víctimas, excombatientes (por ejemplo, ex-FARC acogidos al acuerdo de paz) y demás ciudadanos puedan reconstruir confianza y acordar convicciones comunes de no repetición de la violencia (Delgado, 2011). El apoyo psicosocial a víctimas del desplazamiento, de la violencia sexual en el conflicto o a familias de líderes asesinados es fundamental para que puedan empoderarse nuevamente como actores de la comunidad. Programas como la justicia restaurativa local inspirados en la Jurisdicción Especial para la Paz pero a nivel micro –podrían facilitar que algunos exintegrantes de grupos armados ahora acogidos a la legalidad reparen simbólicamente a sus comunidades, pidan perdón y contribuyan con trabajo comunitario, lo que ayudaría a sanar resentimientos (Restrepo et al., 2019).

Igualmente, la pedagogía de paz en escuelas y espacios públicos también es clave para que las nuevas generaciones crezcan con patrones de resolución de conflictos distintos a la violencia. En paralelo, promover una cultura de legalidad mediante campañas participativas (por ejemplo, comités locales anti-microtráfico, veedurías ciudadanas anticorrupción) puede ir reestableciendo normas sociales alineadas con el Estado de derecho. La reconciliación territorial implica reconocer las particularidades culturales de Arauca, incluyendo a comunidades indígenas y campesinas en la formulación de proyectos, respetando sus visiones de desarrollo y sus formas organizativas tradicionales. Solo con cohesión social y sentido de pertenencia renovado, los logros en seguridad y desarrollo podrán ser sostenibles en el tiempo. En conjunto, estas propuestas estratégicas integrales, de fortalecimiento institucional, de desarrollo sostenible y reconciliación buscan sacar a Arauca del ciclo de violencia y abandono, garantizando la protección de su seguridad energética y sentando las bases de una gobernabilidad territorial legítima y estable (Nogueira, 2023).

Conclusiones

El caso de Arauca ilustra con nitidez las profundas interconexiones entre seguridad energética, conflicto armado y gobernabilidad territorial. Las amenazas ejercidas por los grupos armados ilegales sobre la infraestructura y los recursos energéticos no son fenómenos aislados, sino síntomas y a la vez causas de un entorno de debilidad institucional y exclusión histórica. En las secciones desarrolladas hemos visto cómo la persistencia de la violencia en Arauca ha fragilizado las instituciones locales, truncando iniciativas de desarrollo y quebrantando la confianza de la ciudadanía en el Estado.

A su vez, la ausencia o fracaso del Estado para brindar bienestar y seguridad creó el caldo de cultivo para que poderes paralelos en forma de guerrillas y economías ilegales se consolidaran, erosionando aún más la autoridad estatal. Este proceso ha tenido consecuencias perniciosas que se retroalimentan: la cooptación y corrupción de entidades públicas vacían de contenido la legalidad, la población sufre desplazamientos forzados y ve fragmentada su comunidad, y la legitimidad de las normas e instituciones democráticas se desvanece. Arauca, en suma, cayó en un círculo vicioso donde la riqueza petrolera avivó disputas armadas, las cuales debilitaron al Estado, lo que a su vez impidió que dicha riqueza se tradujera en progreso para la gente.

No obstante, este diagnóstico no implica que el destino de Arauca esté sellado indefectiblemente a la violencia y el desgobierno. Existen caminos de salida que requieren voluntad política, planificación rigurosa e involucramiento activo de todos los sectores de la sociedad. Las propuestas estratégicas presentadas apuntan hacia la construcción de una paz territorial sostenible, abordando los múltiples factores del problema. En primer lugar, reestablecer la seguridad es indispensable: sin un mínimo de orden público, las demás intervenciones no prosperarán. Pero dicha seguridad no puede lograrse solo con la fuerza militar, sino con una presencia integral del Estado que recupere la confianza ciudadana. El fortalecimiento de la institucionalidad local en lo administrativo, lo judicial y lo social – debe ir de la mano con oportunidades de desarrollo económico legal que desvanezcan los incentivos para la ilegalidad. Asimismo, la participación de la comunidad araucana en la definición de su propio futuro es el pegamento que puede unir estos esfuerzos, generando

corresponsabilidad y legitimidad. Experiencias de otros territorios afectados por conflictos internos enseñan que cuando el Estado y la ciudadanía logran alianzas de trabajo colectivo, los grupos armados pierden espacio físico y apoyo social, viéndose forzados a replegarse o incluso a negociar su desmovilización.

En el caso específico de la seguridad energética, garantizar la operación de la infraestructura petrolera en Arauca no es solo un asunto técnico o de protección armada: depende directamente de que exista gobernabilidad en la región. Oleoductos y pozos seguros implican comunidades integradas al desarrollo, actores ilegales desestimulados y un Estado legítimo que ejerce control. Por ello, la defensa de la seguridad energética debe enmarcarse en un enfoque de seguridad humana más amplio, donde la protección de las personas y sus derechos sea el fin último. Solo así las acciones coercitivas (persecución del delito, neutralización de grupos armados) tendrán resultados perdurables, al estar acompañadas de transformaciones sociales y económicas de fondo. En últimas, la gobernabilidad territorial en Arauca requiere reconquistar no solo el territorio físico sino el territorio social: reconstruir los vínculos de confianza, la cultura de legalidad y la presencia ética del Estado en la vida cotidiana de la gente.

[T1] Referencias (APA séptima edición)

- Acevedo, N. C., Ballesteros, B. V., & Corcione, N. M. A. (2022). Seguridad humana y seguridad multidimensional, su enfoque y utilidad para proteger los derechos humanos. *Revista Científica General José María Córdova*, 20(40). <https://doi.org/10.21830/19006586.1081>
- Álvarez, C. C. E. (2018). Ocupación de espacios vacíos: una condición sine qua non de la seguridad multidimensional en Colombia. In *Escenarios y desafíos de la seguridad multidimensional en Colombia*. <https://doi.org/10.25062/9789585652835.05>
- Álvarez, C. C. E., & Rodríguez, B. C. A. (2018). Ecosistemas criminales: hábitats para la convergencia y la globalización desviada. *Revista Científica General José María Córdova*, 16(24).
- Arauca Stereo. (2024). *Secretaría de infraestructura departamental de Arauca reporta 10 obras inconclusas y 48 contratos pendientes*. . <https://meridiano70.co/2024/01/24/infraestructura-arauca-obras-contratos/>
- Blackwell, A. (2021). Seguridad multidimensional: “enfrentando nuevas amenazas.” *Seguridad, Ciencia & Defensa*, 1(1). <https://doi.org/10.59794/rscd.2015.v1i1.pp153-158>
- Botero, C. (2024). Un breve ensayo sobre Arauca: antecedentes y perspectivas del desarrollo regional. *Administración & Desarrollo*, 54(2), 1-23. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9880744>
- Cenit. (2024). Cenit rechaza secuestro de contratistas en zona rural de Convención, . *Norte de Santander. Grupo Ecopetrol*. <https://cenit-transporte.com/2024/10/27/cenit-rechaza-secuestro-de-contratistas-en-zonarural-de-convencion-norte-de-santander/>
- Delgado, B. M. (2011). Una justicia transicional sin transición: verdad, justicia, reparación y reconciliación en medio del conflicto. *Revista Análisis Internacional*, 4(4).
- Ejército Nacional de Colombia. (2022). *Organigrama operacional de la Octava División. Documento interno de planeamiento estratégico*. .
- Fadul, T. E. (2022). *Doctrina de acción integral del Ejército Nacional: herramienta para contrarrestar las acciones de las disidencias de las FARC en Nariño*. . <http://hdl.handle.net/10654/41304>.
- FIP. (2014). Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario: Siguiendo el Conflicto. *Ideaspaz.Org*.
- Guerrero, R. (2021). La cadena de suministro del petróleo con los ataques por grupos armados al oleoducto Caño Limón-Coveñas [. *Universidad Militar Nueva Granada*. <https://repository.unimilitar.edu.co/items/516570ec-0254-4126-a533-a5b78f10121a>
- Guerrero, T. (2023). Movilidad eléctrica: retos y deficiencias enmarcadas desde la infraestructura y marco regulatorio en Colombia (Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Regulación Energética). . *Universidad Externado de Colombia*. <https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/4b26ef87-9482-4fe1-bd1f-513ef696a0ea/content>

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

- Hernandez, H. A., Izquierdo-Pinto, M. C., Izquierdo-Pinto, M. M., & Calderón-Sotero, J. H. (2023). Innovación en la gestión de proyectos de inversión social. *Revista de Investigaciones Universidad Del Quindío*, 35(S1). <https://doi.org/10.33975/riug.vol35ns1.1116>
- Hung Hui, J. (2008). América Latina: la corrupción y la pobreza. *Revista Del CESLA*, 11.
- Lizcano, V. (2022). Arauca: ¿un obstáculo en el camino para la paz del ELN con Colombia? . *InSight Crime*. . <https://insightcrime.org/es/noticias/arauca-obstaculo-en-el-camino-para-la-paz-del-eln-con-colombia/>
- Ministerio de Minas y Energía. (2024). MinEnergía insiste en condenar atentados en Arauca y avanza en acciones de reparación de oleoductos para garantizar su operación. *Ministerio de Minas y Energía*. <https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/minenerg%C3%ADa-insiste-en-condenar-atentados-en-arauca-y-avanza-en-acciones-de-reparaci%C3%B3n-de-oleoductos-para-garantizar-su-operaci%C3%B3n/>
- Monje, Á. C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica. *Universidad Surcolombiana*.
- Naranjo, A. S., & Machuca, P. D. (2019). Zonas Futuro: Una estrategia dirigida a desdibujar la paz territorial del Acuerdo Final. *Señales de La Implementación*, 80.
- Nogueira, L. A. (2023). Desarrollo urbano sostenible: ¿Actuar localmente sin cambio global? *Cuadernos de Derecho Local*. <https://doi.org/10.61521/cuadernosderecholocal.46.766>
- OCHA. (2022). La violencia en la región colombiana de Arauca deja más de 1.500 desplazados. EFE. . *Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios*. <https://www.swissinfo.ch/spa/la-violencia-en-la-regi%C3%B3n-colombiana-de-arauca-deja-m%C3%A1s-de-1-500-desplazados/47280106#:~:text=La%20violencia%20en%20la%20regi%C3%B3n,en%20la%20frontera%20con%20Venezuela>
- Ojeda, P. (2022). El régimen simple de tributación y su conveniencia para las organizaciones en Colombia. Arauca. . *Universidad La Gran Colombia* . <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/a0577639-8011-48a1-8554-2e4cb9102ae9>
- Peñaranda, P. L. P., Hernández, U. G. K., Mogrovejo, andrade, J. M., Bastos, O. L. M., & Mera, R. O. A. (2022). Catatumbo: análisis de los factores socioeconómicos y su relación con la productividad de la región. *Clío América*, 16(31). <https://doi.org/10.21676/23897848.4853>
- Ramírez, P. J. (2011). El Sistema General de Regalías. *Revista Jurídica Piélagus*, 10(1). <https://doi.org/10.25054/16576799.626>
- Ramírez, S. D. M. (2021). Hacia una participación ciudadana transformadora en Colombia. Análisis de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). *Estudios Políticos (Medellín)*, 61. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n61a04>
- Ramos, J., & Orjuela, C. (2023). Influencia del conflicto armado en el transporte de hidrocarburos: Caso Caño Limón-Coveñas (Colombia). . *Repositorio Institucional Séneca. Universidad de Los Andes*. . <https://repositorio.uniandes.edu.co/download>

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

- Restrepo, D. A., Gómez, D., Cáceres, N. V., Perdomo, P., Camilo Rodríguez, J., Londoño, G., Jiménez, A., Macías, L., Torres, J. M., Bedoya, C., Tello, E., Aldana, A., Quiñónez, I., Mateus, D., Sebastián Hernández, J., Botero, M., Abello, D., Académico, S., Castro, J. D., ... Ávila, A. (2019). Informe Más Sombras Que Luces. In *Pares Fundación Paz Y Reconciliación* (Vol. 1, Issue Más sombras que luces la seguridad en colombia a un año del gobierno de Ivan Duque).
- Rivera, G. (2023). Petróleo y violencia en Arauca. Trabajadores, conflicto armado y represión (1983-2018). *Cambios y Permanencias*, 14(2). <https://doi.org/10.18273/cyp.v14n2-202306>
- Robles, C., & Urrutia, M. (2018). Las transferencias condicionadas en Colombia: una historia del programa Familias en Acción (2001-2018). *Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico CEDE*, 54(October).
- Rodríguez, R. (2021). El impacto de la estrategia del Estado colombiano en la presencia del ELN en la frontera colombo-venezolana de Arauca [. *Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Javeriana*]. *Repositorio Institucional Pontificia Universidad Javeriana*. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/53356>
- Romero, A. M. C., & Pérez, H. Ó. I. (2019). Inversión social privada y desarrollo local en Colombia. Estudio comparativo a partir de programas de empresas y fundaciones. *OPERA*, 26. <https://doi.org/10.18601/16578651.n26.07>
- Secretaría de Transparencia. (2023). *Impunidad asociada a delitos contra la administración pública está en un 94 %*. *Presidencia de la República de Colombia*. <https://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/secretar%C3%ADa-de-transparencia-revel%C3%B3-el-primer-mapa-de-la-impunidad-en-colombia>
- Semana. (2023). *Se reactiva la producción petrolera en Arauca luego de bloqueos y amenazas del ELN*. *Semana*. <https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/se-reactiva-la-produccion-petrolera-en-arauca-luego-de-bloqueos-y-amenazas-del-eln/202308/>
- Serrano, G. (2024). ¿Qué hay detrás del desplazamiento forzado?. *Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Psicología, Arauca*. <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/73480642-76a5-4046-b92f-58926bdb2715>
- Transparencia por Colombia. (2025). *Colombia no logra superar sensación de corrupción generalizada: Resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024*. *Transparencia Internacional – Capítulo Colombia*. <https://transparenciacolombia.org.co/colombia-no-logra-superar-sensacion-de-corrupcion-generalizada/>
- Trejos, R. L. F., Bravo, H. A., & Badillo, S. R. (2024). ¿Cómo nombrar nuestra violencia? La lucha por las denominaciones de la guerra en Colombia. *Araucaria*, 55. <https://doi.org/10.12795/araucaria.2024.i55.09>
- Trujillo, D., Salazar Manrique, C. E., & Cardona Angarita, J. (2022). Percepciones de la violencia, un análisis introspectivo sobre la experiencia de un grupo de militares colombianos. *Revista Colombiana de Sociología*, 45(2). <https://doi.org/10.15446/rcs.v45n2.96308>

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

Unidad para las Víctimas. (2022). *Arauca: atención humanitaria a más de 1.900 hogares en primer trimestre*. <https://www.unidadvictimas.gov.co/arauca-atencion-humanitaria-mas-de-1900-hogares-en-primer/#:~:text=Arauca%3A%20atenci%C3%B3n%20humanitaria%20a%20m%C3%A1s,con%20622%20y%20actos>

Vasilachis, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. In *Gedisa: Vol. I*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Vera, S. J. A. (2021). Terrorismo como Detonante de Desastres: Atentados Terroristas Contra Oleoducto Caño Limón Coveñas en Colombia. *Revista de Estudios Latinoamericanos Sobre Reducción Del Riesgo de Desastres REDER*, 5(1), 126. <https://doi.org/10.55467/reder.v5i1.65>